

Barranquilla, Atlántico 19 de mayo de 2021

Señores:
Juzgado Administrativo del Circuito (Reparto)
E. S. D.

Referencia: Acción de tutela
Accionante: María Luisa Acosta Lacouture
Accionado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Presentación

María Luisa Acosta Lacouture, mayor, domiciliada en Barranquilla-Atlántico, identificada con la cedula de ciudadanía No. 49.772.654, actuando en nombre propio, y en representación de mi menor hija Juliana Araujo Acosta, con todo respeto manifiesto a usted que en ejercicio del derecho constitucional de la acción de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, por este escrito formulo acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil - Representada legalmente por el señor Alexander Vega Rocha o quien haga sus veces y los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en Atlántico, con el fin de que se les ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, proteger y amparar mis derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada relativa, al trabajo, el debido proceso administrativo, la igualdad, el mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad, la vida digna, y al principio de publicidad, así como los derechos fundamentales de mi menor hija Juliana Araujo Acosta a la salud, educación, recreación, seguridad social, vivienda y educación equilibrada.

Fundamentos de Hecho

Primero. Durante casi dos (02) años estuve vinculada a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el cargo de Técnico Administrativo 4065-02 y Técnico Operativo 4080-03 en la Delegación Departamental del Atlántico con sede en Barranquilla, mediante nombramientos de tracto sucesivo y permanente en el cargo, los cuales están certificados en las siguientes resoluciones, certificadas y expedidas por la **Registraduría Nacional del Estado Civil**:

Resoluciones de nombramiento y prórroga del cargo en provisionalidad detentado por la accionante					
Ítem	Resolución	Fecha inicio	Fecha terminación	Clase de Nombramiento	Cargo
1	0339	01/ agosto / 2019	30 / diciembre / 2019	supernumerario	Técnico administrativo 4065-02
2	0822	21 / noviembre / 2019	06 / febrero / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03
3	0053	07 / febrero / 2020	05 / mayo / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03
4	0171	06 / mayo / 2020	06 / agosto / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03
5	0301	07 / agosto / 2020	06 / noviembre / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03
6	0429	07 / noviembre /	06 / febrero / 2021	Provisional	Técnico

		2020			operativo 4080-03
7	0038	07 / febrero / 2020	06 / mayo / 2021	Provisional	Técnico operativo 4080-03

Segundo. Que mediante Resolución No. 0195 de 2021 proferida por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el Atlántico se efectuaron unas prorrogas de nombramientos en provisionalidad, dentro de las cuales no se encontraba la prórroga de la suscrita.

Tercero. La no prorroga de mi vinculación en el cargo que venía ejerciendo, no obedeció al nombramiento del titular en carrera administrativa como ordena el ordenamiento jurídico, sino en una artimaña para nombrar en provisionalidad a otra persona que no ostenta dicha prerrogativa.

Cuarto. La desvinculación del cargo que venía desempeñando en provisionalidad, no se realizó mediante acto administrativo motivado, que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los empleados públicos que desempeñan cargos en Provisionalidad, gozan de estabilidad laboral relativa o intermedia, lo que conlleva a que el acto administrativo de la desvinculación debe ser motivado, contener las razones de la decisión, pues los cargos en provisionalidad y no pueden convertirse en cargos de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, su desvinculación debe ser únicamente para proveer el cargo en carrera administrativa, o por acto administrativo debidamente motivado por las causales de remoción establecidas para el efecto.

Sexto. Debo indicar que las labores que desarrollé como Técnico operativo 4080-03, es mi única fuente de trabajo, como el de mi núcleo familiar es compuesto por mi niña – hija menor de edad, Juliana Araujo Acosta de siete (7) años de edad, pues soy madre soltera, cabeza de familia velo por ella, yo soy la encargada de atenderla en todas sus necesidades económicas, salud, educación, recreación, tengo varias obligaciones en su manutención, así como de mi señora madre, adulto mayor, quien también depende de mi trabajo para subsistir dignamente, quienes ante la decisión desbordada e ilegal de la Entidad accionada, quedamos totalmente desprotegidas.

Séptimo. Mis derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada relativa, al trabajo, el debido proceso administrativo, la igualdad, el mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad, la vida digna, y al principio de publicidad han sido vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Atlántico, así como los derechos fundamentales de mi menor hija a la salud, educación, recreación, seguridad social y educación equilibrada.

Solicitud

Primero. Honorable Juez (a) respetuosamente solicito la protección y amparo constitucional de mis derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada relativa, al trabajo, el debido proceso administrativo, la igualdad, el mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad, la vida digna, y al principio de publicidad, así como de los derechos fundamentales de mi menor hija a la salud, educación, recreación, seguridad social y educación equilibrada.

Segundo. Su señoría solicito se ordene el reintegro inmediato al mismo empleo que venía ejerciendo o a uno de mayor jerarquía del que venía desempeñando en provisionalidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil; al pago de los haberes, los salarios dejados de percibir, las prestaciones sociales, las vacaciones, las bonificaciones, las cesantías, y la seguridad social dejados de percibir desde la fecha en que fui desvinculada y hasta la fecha en que se produzca el respectivo reintegro.

Tercero. Señor (a) director (a) de la presente acción constitucional de tutela, solicito que el reintegro deberá ser ordenado hasta cuando el cargo desempeñado por la suscrita, sea provisto mediante el sistema de concurso de méritos, se haya suprimido o la desvinculada haya llegado a la edad de retiro forzoso.

Cuarto. El reintegro al citado cargo deberá hacerse en provisionalidad con todas las garantías legales,

sin solución de continuidad para todos los efectos legales, podrá ser de hasta seis (06) meses, con la posibilidad de prórroga en los términos señalados en el parágrafo transitorio del artículo 8 del Decreto 1227 del año 2005.

Fundamentos de Derecho

La presente Acción Constitucional se fundamenta en el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, en relación a la procedencia de la acción constitucional de la tutela. Lo dicho expresando que mis derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada relativa, al trabajo, el debido proceso administrativo, la igualdad, el mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad, la vida digna, y al principio de publicidad, así como de los derechos fundamentales de mi menor hija a la salud, educación, recreación, seguridad social y educación equilibrada, fueron violentados por la entidad accionada.

· **Desvinculación en cargo de carrera en provisionalidad.** La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la tutela para solicitar el reintegro de servidores públicos a los cargos de los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se advierte la vulneración de un derecho fundamental y se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, toda vez que en estos eventos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no proporciona una protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados.

· **Empleado nombrado en provisionalidad en cargo de carrera administrativa.** Goza de estabilidad intermedia. Los funcionarios públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica, sin embargo, que el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad.

· **Actos de retiro.** Deber de motivar los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargo de carrera. En cuanto al retiro de servidores vinculados en provisionalidad, la Corte Constitucional a través de reiterada jurisprudencia ha indicado:

“el inexcusable deber de motivación de dichos actos. Así lo ha señalado desde hace más de una década de manera uniforme y reiterada en los numerosos fallos en los que ha examinado esta problemática, a tal punto que a la fecha se registra casi un centenar de sentencias en la misma dirección, aunque con algunas variables respecto de las medidas de protección adoptadas”.

· **Provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y la protección especial de las personas en situación de discapacidad, madres y padres cabeza de familia y pre pensionados.** Cuando con fundamento en el principio del mérito surja en cabeza del nominador la obligación de nombrar de la lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y pre pensionados, en aplicación de medidas afirmativas dispuestas en la constitución, y en la materialización del principio de solidaridad social, se debe proceder con especial cuidado previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus derechos y en caso de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como en el momento del posible nombramiento.

En **Sentencia T-373 de 2017 de la Corte Constitucional** ha expresado:

“... Estabilidad intermedia de los funcionarios nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa.

Por su parte, los funcionarios públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica, sin embargo, que **el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, debe contener las razones de la**

decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad¹.

Ahora bien, esta Corporación ha reconocido que cuando un funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera y es, además, sujeto de especial protección constitucional, **“concurre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa”.**

Si bien estas personas no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse por medio de un concurso de méritos, sí debe otorgárseles un trato preferencial como acción afirmativa², antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

Ello en virtud de los mandatos contenidos en los **incisos 2 y 3 del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia**, relativos a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que consagran una protección reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las madres cabeza de familia (**artículo 43 Constitución Política de Colombia**), los niños (**artículo 44 Constitución Política de Colombia**), las personas de la tercera edad (**artículo 46 Constitución Política de Colombia**) y las personas con discapacidad (**artículo 47 Constitución Política de Colombia**)³.

En relación con la estabilidad laboral relativa de que gozan los funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la Corte Constitucional ha señalado algunas medidas que pueden adoptarse para garantizar los derechos fundamentales de quienes ameritan una especial protección

¹ La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consolidada sobre el deber de motivación de los actos de desvinculación de los funcionarios públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la cual fue sentada desde la **sentencia T-800 de 1998** (MP Vladimiro Naranjo Mesa). En esta providencia, la Corte conoció la acción de tutela interpuesta con ocasión de la desvinculación de una mujer madre cabeza de familia, que desempeñaba en provisionalidad el cargo de auxiliar de enfermería, el cual era de carrera. Esta Corporación confirmó las sentencias de instancia, mediante las cuales se ordenaba el reintegro de manera transitoria, mientras la jurisdicción de lo contencioso decidía sobre la legalidad del acto por medio del cual se dispuso su desvinculación. Para tal efecto, la Corte explicó que el derecho a permanecer en un cargo determinado no es fundamental, sin embargo consideró que por las particularidades del caso, procedía la acción de tutela para proteger otros derechos fundamentales a fin de evitar un perjuicio irremediable, pues con base en las circunstancias particulares de la peticionaria se vislumbraba que “la pérdida del trabajo [...] y su consiguiente vacancia, la enfrentaría, junto con su hijo, a un perjuicio irremediable que no podría ser corregido a tiempo, si no es porque la acción de tutela permite evitarlo”. Además, la Corte sostuvo por vez primera que “el nombramiento en provisionalidad de servidores públicos para cargos de carrera administrativa, como es el caso, no convierte el cargo en uno de libre nombramiento y remoción. Por ello, el nominador no puede desvincular al empleado con la misma discrecionalidad con que puede hacerlo sobre uno de libre nombramiento y remoción, a menos que exista justa causa para ello”. Esta postura ha permanecido inalterada como lo detalló la Corte en la **SU-917 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla)**. En esta ocasión, la Corte Constitucional asumió el conocimiento de 24 expedientes de tutela, los cuales fueron acumulados luego de advertir la existencia de conexidad temática ya que todos los accionantes desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad en diferentes entidades públicas, siendo desvinculados de sus empleos sin que los actos de retiro hubieran sido motivados. Este Tribunal (i) reiteró la posición sentada por la Corte desde el año mil novecientos noventa y ocho (1998) referente a la falta de motivación de los actos administrativos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, y (ii) resaltó la estrecha relación que guarda la exigencia de motivar los actos administrativo con importantes preceptos de orden constitucional como lo son el principio democrático, la cláusula del Estado de Derecho, el debido proceso y el principio de publicidad. La Sala Plena de la Corte Constitucional señaló en relación con el contenido de la motivación lo siguiente: “El acto de retiro no sólo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas exigencias mínimas respecto de su contenido material, de modo que el administrado cuente con elementos de juicio necesarios para decidir si acude o no ante la jurisdicción y demanda la nulidad del acto en los términos del artículo 84 del CCA. Lo contrario significaría anteponer una exigencia formal de motivación en detrimento del derecho sustancial al debido proceso, pues si no se sabe con precisión cuáles son las razones de una decisión administrativa difícilmente podrá controvertirse el acto tanto en sede gubernativa como jurisdiccional. || Es por lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de “razón suficiente” en el acto administrativo que declara la insubsistencia o en general prescinde de los servicios de un empleado vinculado en provisionalidad, donde “deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuáles se decide remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predicen directamente de quien es desvinculado”...”. Concluyó que “respecto del acto de retiro de un servidor público que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la obligación de motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión”. **Entre otras, también pueden consultarse las sentencias T-289 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-462 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).**

² En relación con este aspecto de la acción afirmativa pueden ser consultadas las sentencias **SU-446 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-186 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)**. Este razonamiento se impuso por la Sala Plena de la Corporación en la providencia SU-446 de 2011, en la cual se planteó que, aunque primaban los derechos de acceder al cargo de los empleados de carrera, la entidad (Fiscalía General de la Nación) tenía el deber constitucional de emplear medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad.

³ Al respecto, ver, entre otras la **sentencia T-462 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y la SU-446 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto; AV Luis Ernesto Vargas Silva)**.

constitucional por estar en condiciones de vulnerabilidad.

Por ejemplo, en la **Sentencia de unificación SU-446 de 2014**⁴, la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento en torno a la relación existente entre la provisión de cargos de carrera mediante concurso de méritos y la protección especial de las personas que ocupan dichos cargos en provisionalidad y se encuentran en circunstancias especiales tales como las madres y padres cabeza de familia, pre-pensionados o personas en situación de discapacidad.

Al respecto se expresó:

“...Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación⁵, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación⁶.

En consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.

[...] Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la discrecionalidad de la que gozaba, sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como una medida de acción afirmativa a: **i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 –fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008– les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad.**

“En estos tres eventos la Fiscalía General de la Nación ha debido prever mecanismos para garantizar que las personas en las condiciones antedichas, fueran las últimas en ser desvinculadas, porque si bien una cualquiera de las situaciones descritas no otorga un derecho indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de méritos. Como el ente fiscal no previó dispositivo alguno para no lesionar los derechos de ese grupo de personas, estando obligado a hacerlo, en los términos del artículo 13 de la Constitución, esta Corte le ordenará a la entidad que dichas personas, de ser posible, sean nuevamente vinculadas en forma provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando...” **(Negritas originales).**

Entonces, pese a la potestad de desvincular a los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera, para no vulnerar los derechos fundamentales de aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad deben observarse unos requisitos propios de la estabilidad relativa o intermedia de que son titulares, entre ellos (i) la adopción de medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad, y (ii) la motivación del acto administrativo de desvinculación.

En **Sentencia T-221- del año 2014**⁷ de la Corte Constitucional, en la que se resolvió un caso

⁴ MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto; AV Luis Ernesto Vargas Silva. En esta ocasión correspondió a la Corte, entre otros asuntos, resolver dos interrogantes: i) si la Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso de quienes estaban en una situación de especial protección constitucional, al desvincularlos del cargo que ocupaban en provisionalidad, pese a su condición especial que obligaba a que se les brindara un trato preferente, cuando era posible desvincular a otros servidores en provisionalidad no sujetos a un trato preferente, y ii) determinar si la entidad demandada desconoció los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los demás provisionales – no sujetos de especial protección– al no señalar de antemano los criterios de selección de los cargos específicos que serían provistos con personas que superaron el concurso. Concluyó que “[e]n el caso de los provisionales que son sujetos de especial de (sic) protección, si bien la Corte no concederá la tutela porque no ostentaban un derecho a permanecer en el empleo, sí se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que, en el evento en que a la fecha de expedición del fallo existan vacantes disponibles en cargos iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando, sean vinculados en provisionalidad mientras se realiza un nuevo concurso. La desvinculación de estos servidores sólo será posible previo acto administrativo motivado en los términos de la **sentencia SU-917 de 2010**”

⁵ La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la **sentencia SU-917 de 2010, MP Jorge Iván Palacio Palacio (cita del texto).**

⁶ Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059 de 2005; T-1117 de 2005; T-245 de 2007; T-887 de 2007; T-010 de 2008; T-437 de 2008; T-087 de 2009 y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la jurisprudencia sobre este particular y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos casos (cita del texto)

⁷ **Sentencia T-221/14 - Acción de tutela contra actos administrativos que desvinculan a empleados públicos de sus cargos-procedencia.** La Corte Constitucional ha señalado que el mecanismo judicial previsto por el ordenamiento jurídico para controvertir los actos administrativos, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida ante la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, en relación con los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que han sido retirados sin la motivación del acto administrativo de desvinculación, la Corte ha adoptado diversas formas de proteger los derechos fundamentales de dichos funcionarios por vía de tutela, dependiendo de las particularidades de cada caso.

Cargo de carrera en provisionalidad-Goza de estabilidad laboral relativa. Los funcionarios públicos que desempeñan cargos de carrera nombrados en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica que el acto administrativo por

análogo al presente, la Corporación expresó:

“... **3.3.** La Corte Constitucional ha señalado que el mecanismo judicial previsto por el ordenamiento jurídico para controvertir los actos administrativos, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

No obstante, en relación con los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que han sido retirados sin la motivación del acto administrativo de desvinculación, la Corte ha adoptado diversas formas de proteger los derechos fundamentales de dichos funcionarios por vía de tutela, dependiendo de las particularidades de cada caso.

3.3.1. En algunas oportunidades, la Corte ha accedido a la solicitud de reintegro de funcionarios públicos como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuando han sido desvinculados del cargo de carrera que ocupaban en provisionalidad sin motivación del acto administrativo.

Por ejemplo, en la **Sentencia T-752 de 2003, la Corte Constitucional** concedió el amparo transitorio de los derechos fundamentales de una empleada del Club Militar de Oficiales de Bogotá que había sido desvinculada sin motivación alguna del cargo que venía ocupando en provisionalidad, por cuanto se trataba de una madre cabeza de familia que dependía de su salario para satisfacer las necesidades básicas de ella y su hijo.

3.3.2. En otras ocasiones la jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela procede con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso, pese a no estar en presencia de un perjuicio irremediable, cuando la autoridad nominadora no motivó el acto administrativo de desvinculación de un funcionario público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera, con el fin de que este pueda oponerse a la decisión, con pleno conocimiento de las razones que conllevaron a su desvinculación y así poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa y ejercer su derecho de contradicción y defensa.

Al respecto, la **Corte Constitucional en la Sentencia T-1240 de 2004** consideró:

“...En ese contexto, es claro que no hay mecanismo alternativo de defensa judicial orientado a obtener que la Administración produzca esa motivación, que, como ha dicho la jurisprudencia, resulta indispensable para establecer si ha habido una lesión de los derechos fundamentales. Por consiguiente, resulta en este caso procedente la tutela como mecanismo definitivo, porque la decisión que resuelva que hay lugar al amparo, conduciría a una actuación de la Administración que es autónoma de los procesos contenciosos administrativos que podrían suscitarse a partir del acto de desvinculación.

En efecto, la orden de protección, en el evento de resultar ella procedente, se orientaría a obtener que la Administración motive el acto de desvinculación, si existe una razón para la misma, caso en el cual se abriría la puerta para que, si la afectada lo considera del caso, acuda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En caso contrario la Administración puede omitir motivar el acto, evento en el cual cabría ordenar el reintegro con carácter definitivo, por desconocimiento del derecho de raigambre constitucional a la motivación del acto de desvinculación.

Es claro que, en un evento tal, la negativa de la Administración a motivar el acto de desvinculación, no obstante, la conminación del juez de tutela, equivale a la aceptación de que no existe motivo alguno para la misma, distinto del arbitrio del nominador, razón por la cual cabe que en sede de tutela se ordene el reintegro, hasta tanto se produzca el respectivo concurso de méritos o la desvinculación se produzca por razones que la hagan justificada...”

De este modo, no obstante que, como se ha señalado, el acto de desvinculación de un empleado que ocupa en provisionalidad un cargo de carrera que se produce sin motivación alguna es susceptible de controversia en la vía contenciosa administrativa, la jurisprudencia constitucional ha configurado como un derecho de raigambre constitucional la motivación del acto de desvinculación de un empleo de carrera que se ocupa en provisionalidad, razón por la cual, el mismo es susceptible de protección

medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad. **Actos de Retiro.** Deber de motivar los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargo de carrera. En cuanto al retiro de servidores vinculados en provisionalidad, la Corte Constitucional a través de reiterada jurisprudencia ha indicado “el inexcusable deber de motivación de dichos actos. Así lo ha señalado desde hace más de una década de manera uniforme y reiterada en los numerosos fallos en los que ha examinado esta problemática, a tal punto que a la fecha se registra casi un centenar de sentencias en la misma dirección, aunque con algunas variables respecto de las medidas de protección adoptadas”.

Desvinculación en cargo de Carrera en Provisionalidad. Debe ser motivado/actos de retiro-Derecho a conocer cuáles fueron las razones que motivaron la decisión. A la persona nombrada en provisionalidad le asiste el derecho de conocer las razones por las cuales se les desvincula del servicio (i) como garantía derivada del derecho fundamental al debido proceso, el respeto al Estado de derecho, el principio democrático y el principio de publicidad; (ii) el deber general de motivar los actos administrativos; (iii) la posibilidad que le asiste a los administrados de conocer cuáles son las razones que se invocan para su retiro cuando ejercen un cargo en provisionalidad; (iv) el derecho que le asiste a quienes ocupan un cargo de carrera en provisionalidad de motivar el acto de insubsistencia, como garantía mínima del derecho fundamental al debido proceso y del control de la arbitrariedad de la administración, a diferencia de quienes ocupan un cargo de libre nombramiento y remoción para los cuales tiene cabida la excepción de la motivación del acto de retiro.

Reintegro a cargo en provisionalidad. Orden a la Registraduría reintegrar a la accionante al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro, si éste no ha sido provisto por concurso de méritos.

autónoma por la vía de la acción de tutela, ya que no existiría motivo distinto que el arbitrio del nominador de no motivar el acto de desvinculación, o como en el caso que nos ocupa, donde ni siquiera se produjo acto administrativo de desvinculación.

Ahora bien, para que proceda el amparo del derecho al debido proceso por falta de motivación del acto administrativo de desvinculación, la Corte Constitucional ha señalado que deben cumplirse los siguientes requisitos:

- i. Que se trate de un funcionario nombrado en provisionalidad-
- ii. Que el cargo que se ocupe sea de carrera administrativa.
- iii. Que sea posteriormente desvinculado mediante un acto administrativo no motivado o sin acto administrativo.
- iv. Que se haya remplazado por un funcionario también nombrado en provisionalidad.

Su señoría de la anterior interpretación jurisprudencial constituye precedente judicial y debe aplicarse en mi caso, en la protección de mis derechos fundamentales vulnerados y los de mi menor hija por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en Atlántico.

En suma, los servidores públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa, tienen derecho a la estabilidad laboral relativa, que se vulnera cuando:

(i) Son desvinculados mediante acto administrativo no motivado.

(ii) Son reemplazados por un funcionario también nombrado en provisionalidad, como ocurre en el presente caso, o simplemente no se nombra persona alguna para proveerlo

En Sentencia de tutela Radicado 68001-22-13-000-2020-00037-00 interno 2020 191- del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga fechado 25 marzo del año 2020 siendo accionante Cesar Augusto Mayorga Castellanos en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Delegados del Registrador Municipal del Estado Civil en Santander, se amparó los derechos del funcionario en provisionalidad teniendo de presente las premisas fácticas y jurídicas, en especial con fundamento en lo dispuesto en la línea jurisprudencial analizada en el transcurso del presente escrito, lo que indica que, en mi caso ha de garantizarse los derechos fundamentales invocados y garantizarse mi derecho a la estabilidad laboral reforzada al ser madre cabeza de familia, y den tanto mi desvinculación no fue hecha mediante acto administrativo debidamente motivado, ni se produjo para efectos de nombrar en el cargo a una persona en carrera administrativa.

Procedencia y Legitimidad

Esta acción de tutela es procedente de conformidad a lo establecido en los artículos 1, 2, 5 y 9 del Decreto 2591 de 1991, ya que lo que se pretende es que se garantice mi derecho fundamental al trabajo y los de especial protección de mi menor hija Juliana Araujo Acosta, ordenándose el reintegro al cargo en provisionalidad que venía desempeñando en la Registraduría Nacional del Estado Civil, para evitarse un perjuicio irremediable, a su vez porque la accionada no motivó ni expidió acto administrativo de desvinculación, ni mucho menos se hizo para nombrar a una persona en carrera administrativa.

En este caso no existen mecanismos eficaces para defender mis derechos fundamentales y los de mi menor hija, y por ende, la tutela se torna en el único mecanismo eficaz para garantizar los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela interpuesta. Por lo anterior, no existen otros mecanismos idóneos para hacer efectivos mis derechos y los de mi menor hija, o si existen, no tienen la conducencia y eficacia jurídica para la real garantía de los derechos invocados en el presente recurso de amparo.

La existencia de otro medio de defensa ha sido reiteradamente explicada por la Corte Constitucional, en el sentido de que no siempre que se presenten varios mecanismos de defensa, la tutela resulta improcedente. Para que esto ocurra, es necesario además una ponderación de eficacia de los mismos a partir de la cual se concluya que alguno de los otros medios existentes, es tan eficaz para la protección del derecho fundamental como la acción de tutela misma y en tal sentido en la **Sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992, Sala Primera de Revisión**, manifestó:

"... Es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contratación con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente."

En tal sentido, es claro señor juez que en este caso, la tutela es el mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados en mi nombre y en representación de mi menor hija, ya que, de no hacerlo, se causaría un perjuicio irremediable contra un sujeto de especial protección constitucional como son los niños (artículo 44 constitucional) y se prohibiría el acceso a la administración de justicia, debido a que no existe acto administrativo para demandar, tampoco motivación alguna que pueda desvirtuarse, ni mucho menos un nombramiento en carrera de la persona que haya adquirido dicho derecho mediante el concurso correspondiente.

Finalmente, debo indicar que para los efectos de que trata los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo juramento que con anterioridad a esta acción no he promovido acción similar por los mismos hechos.

Anexos

Me permito anexar a la presente acción constitucional los siguientes documentos:

- Fotocopia de mi Cédula de Ciudadanía.
- Resoluciones de Nombramiento:

Resoluciones de nombramiento y prórroga del cargo en provisionalidad detentado por la accionante					
Ítem	Resolución	Fecha inicio	Fecha terminación	Clase de Nombramiento	Cargo
1	0339	01/ agosto / 2019	30 / diciembre / 2019	supernumerario	Técnico administrativo 4065-02
2	0822	21 / noviembre / 2019	06 / febrero / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03
3	0053	07 / febrero / 2020	05 / mayo / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03
4	0171	06 / mayo / 2020	06 / agosto / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03

5	0301	07 / agosto / 2020	06 / noviembre / 2020	Provisional	Técnico operativo 4080-03
6	0429	07 / noviembre / 2020	06 / febrero / 2021	Provisional	Técnico operativo 4080-03
7	0038	07 / febrero / 2020	06 / mayo / 2021	Provisional	Técnico operativo 4080-03

- Resolución No. 0195 del 30 de abril de 2021 por medio de la cual los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el Atlántico efectuaron unas prórrogas de unos nombramientos en provisionalidad, en la que no fui incluida y con lo cual, se dio por terminada la vinculación en provisionalidad que venía desempeñando por casi dos años.
- Registro civil de nacimiento de mi menor hija Juliana Araujo Acosta, NUIP 1.046.718.555.
- Constancia de afiliación de salud en Colsanitas de mi hija menor Juliana Araujo Acosta y de mi señora madre Maria Luisa Lacouture.
- Certificado de estudio del colegio de mi hija menor Juliana Araujo Acosta.
- Constancia de afiliación de eps sanitas de mi señora madre Maria Luisa Lacouture.

Notificaciones

La suscrita puede ser notificada en el correo electrónico maichaacosta@hotmail.com y en mi dirección de residencia carrera 52 # 79-42 apto 8c en Barranquilla, Atlántico.

El Registrador Nacional del Estado Civil en: notificacionjudicial@registraduria.gov.co y notificaciontutelas@registraduria.gov.co.

Los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en Atlántico en la calle 77 No. 58-68 de Barranquilla-Atlántico.

Agradezco su atención.

Atentamente

María Luisa Acosta Lacouture
Cédula de ciudadanía No. 49.772.654 expedida en Valledupar